

18ª REUNIÓN — 13ª SESIÓN EXTRAORDINARIA — 1º DE MARZO DE 1984

Presidencia del señor vicepresidente de la Nación,
doctor VÍCTOR HIPÓLITO MARTÍNEZ

Secretarios: doctores ANTONIO J. MACRIS y LEONARDO JUSTO PALOMEQUE

Prosecretarios: doctor ALBERTO J. B. IRIBARNE y señor DESIDERIO LAUREANO ALMIRÓN

PERSONALIDADES INVITADAS:

- Su excelencia el embajador extraordinario y plenipotenciario de Costa Rica, Sr. Roberto Morales Valle.
- Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, doctor Pedro Nikken.
- Secretario de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, doctor Charles Moyer.

SENADORES PRESENTES:

ALMENDRA Ramón A.
AMOEDO, Julia A.
ARAUJO, Ramón A.
BENITEZ, Alfredo L.
BITTEL, Deolindo F.
BRASESCO, Luis A. J.
BRAVO HERRERA, Horacio F.
BRITOS, Oraldo Norvel
CASTRO, Jorge A.
CELLI, Felipe
CONCHEZ, Pedro A.
DE LA RUA, Fernando
FALSONE, José A.
FERIS, Gabriel
GASS, Adolfo
GIL, Francisco
GÓMEZ CENTURIÓN, Carlos E.
GURDULICH de CORREA, Lilliana Isabel
LAFFERRIÈRE, Ricardo E.
LECONTE, Ricardo G.

LEÓN, Luis A.
MALHARRO de TORRES, Margarita
MARINI, Celestino A.
MARTIARENA, José H.
MATHUS ESCORIHUELA, Miguel A.
MAUHUM, Fernando H.
MAZZUCCO, Faustino M.
MENEM, Eduardo
MURGUÍA, Edgardo P. V.
NÁPOLI, Antonio O.
NIEVÉS, Rogelio J.
OTERO, Edison
RIVAS Oljela del Valle
RODRÍGUEZ SAA, Alberto J.
SAADI, Vicente L.
SÁNCHEZ, Libardo N.
SAPAG, Elías
SOLANA, Jorge D.
TRILLA, Juan
VELÁZQUEZ, Héctor J.
VIDAL, Manuel D.
WOODLEY, Kenneth W.

AUSENTE, EN COMISIÓN:

BERHONGARAY, Antonio T.

AUSENTES, CON AVISO:

SALIM, Luis
SIGAL, Humberto C.
VILLADA, Francisco R.

SUMARIO

1.—Consideración de versiones taquigráficas. Se aprueban. (Pág. 705.)

2.—Asuntos Entrados:

I.—Decreto de la Presidencia del Honorable Senado. (Pág. 708.)

II.—Mensajes del Poder Ejecutivo en los que se solicitan acuerdos. (Pág. 708.)

III.—Comunicaciones de la Presidencia de la Nación. (Pág. 708.)

IV.—Comunicación de un señor senador. (Página 708.)

V.—Comunicación de comisión. (Pág. 707.)

VI.—Comunicaciones oficiales. (Pág. 707.)

VII.—Dietámenes de comisiones. (Pág. 707.)

VIII.—Peticiónes particulares. (Pág. 708.)

IX.—Proyecto de comunicación de la señora senadora Malharro de Torres y otros señores senadores sobre asignación de ayuda escolar. (Pág. 708.)

X.—Proyecto de comunicación del señor senador Bravo Herrera sobre derogación de decretos referentes a regímenes de trabajo y actividades gremiales. (Página 709.)

XI.—Proyecto de comunicación del señor senador Bravo Herrera sobre derogación de leyes referentes a regímenes de trabajo y actividades gremiales. (Pág. 709.)

XII.—Proyecto de ley de los señores senadores Sánchez y Menem sobre realización de un congreso interamericano de turismo en Buenos Aires. (Pág. 710.)

XIII.—Proyecto de ley de los señores senadores Gómez Centurión y Gil sobre transferencia de terreno para la construcción del colegio nacional de Albardón, San Juan. (Pág. 712.)

XIV.—Proyecto de comunicación del señor senador Castro sobre construcción del edificio de la escuela ENET N° 1 en Santiago del Estero. (Pág. 713.)

XV.—Proyecto de resolución del señor senador Bravo Herrera sobre reimpresión de la obra *Asambleas Constituyentes Argentinas*, del doctor Emilio Ravignani. (Pág. 713.)

XVI.—Proyecto de comunicación del señor senador Berhongaray sobre reformas a la ley 18.302 (limitación del número de organismos autorizados para disponer de fondos reservados y/o secretos). (Página 714.)

XVII.—Proyecto de comunicación del señor senador Sigal sobre congelamiento de la tarifa de gas y desgravación impositiva sobre servicios públicos a jubilados y pensionados de la región patagónica. (Pág. 715.)

XVIII.—Proyecto de comunicación de los señores senadores Bittel y Nieves por el que se solicita la modificación de la ley 22.710 (amnistía por falta de inscripción de nacimientos). (Pág. 716.)

XIX.—Proyecto de comunicación de los señores senadores Bittel y Nieves por el que se solicita la modificación de la ley 22.863 (amnistía a infractores de la ley de identificación). (Pág. 716.)

XX.—Proyecto de comunicación de los señores senadores Nápoli y Celli por el que se requiere la finalización de la construcción y equipamiento del edificio de la Biblioteca Nacional. (Pág. 717.)

XXI.—Proyecto de comunicación del señor senador Murguía por el que se solicita el reconocimiento de la potestad tributaria de provincias y municipios sobre empresas del Estado. (Pág. 717.)

XXII.—Proyecto de comunicación del señor senador Murguía por el que se requiere del Poder Ejecutivo el envío de un proyecto de ley sobre locaciones, que disponga la suspensión de los procesos de desalojo. (Pág. 717.)

XXIII.—Proyecto de comunicación del señor senador Volázquez y otros señores senadores por el que se requiere que el Poder Ejecutivo asegure la retransmisión televisiva de espectáculos culturales y deportivos en el interior. (Pág. 718.)

XXIV.—Proyecto de ley del señor senador Volázquez y otros señores senadores por el que se crea un juzgado federal de primera instancia, su cámara de apelaciones, y un ministerio público en Eldorado, Misiones. (Pág. 719.)

XXV.—Proyecto de comunicación de los señores senadores Nieves y Bittel por el que se requiere la utilización de créditos destinados al almacenaje de granos, en zonas marginales pampeanas. (Pág. 720.)

XXVI.—Proyecto de resolución del señor senador Berhongaray y otros señores senadores por el que se modifica el Reglamento de la Honorable Cámara de Senadores. (Pág. 721.)

XXVII.—Proyecto de comunicación de los señores senadores Marini y Gurdulich de Correa por el que se requiere apoyo económico para la provincia de Santa Fe con motivo de los perjuicios ocasionados por las inundaciones. (Pág. 721.)

XXVIII.—Proyecto de comunicación de los señores senadores Britos y Rodríguez Saá por el que se requiere la modificación del Código de Procedimientos en Materia Penal en cuanto a las declaraciones prestadas durante la prevención policial. (Pág. 722.)

XXIX.—Proyecto de resolución del señor senador Rodríguez Saá por el que se crea una comisión especial para lograr la repatriación de los restos del brigadier general don Juan Manuel de Rosas. (Pág. 722.)

3.—Consideración del dictamen de las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto, de Derechos y Garantías y de Asuntos Constitucionales en el proyecto de ley en revisión sobre aprobación de la Convención de Derechos Humanos, llamada Pacto de San José de Costa Rica. Se aprueba. (Pág. 723.)

4.—A moción del señor senador Almendra se considera sobre tablas y se aprueba con modificaciones el dictamen de las comisiones de Asistencia Social y Salud Pública y de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de ley en revisión sobre el Programa Alimentario Nacional. (Pág. 747.)

5.—A pedido del señor senador Gómez Centurión se resuelve enviar a comisión con recomendación de pronto despacho el proyecto de ley a que se refiere el punto XIII de los Asuntos Entrados. (Página 764.)

6.—A pedido del señor senador Murguía se resuelve enviar a comisión con recomendación de pronto despacho el proyecto de ley a que se refiere el punto XXII de los Asuntos Entrados. (Pág. 765.)

7.—A moción de la señora senadora Gurdulich de Correa se considera sobre tablas y se aprueba el proyecto de comunicación de los señores senadores Gurdulich de Correa y Marini por el que se solicita al Poder Ejecutivo nacional apoyo extraordinario para las ciudades de Santa Fe y Rosario afectadas por las inundaciones. (Pág. 765.)

8.—Moción del señor senador Rodríguez Saá para postergar hasta la semana próxima la consideración del proyecto de comunicación de los señores senadores Solana y Nápoli sobre prórroga del régimen de compatibilidad en favor de los jubilados que residen y desempeñan tareas en relación de dependencia en las provincias de Neuquén y Río Negro. Se aprueba. (Pág. 766.)

9.—Consideración del dictamen de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Agricultura y Ganadería en el proyecto de ley, venido en revisión, sobre reformas a la ley 21.740 (Junta Nacional de Carnes). Se aprueba. (Pág. 767.)

10.—Consideración del dictamen de la Comisión de Educación en el proyecto de comunicación de los señores senadores Martiarena y Benítez por el que se solicita al Poder Ejecutivo nacional la construcción del edificio de la Escuela Nacional de Co-

mercio Nº 1, de la ciudad de San Salvador de Jujuy. Se aprueba. (Pág. 771.)

11.—Consideración del dictamen de la Comisión de Educación en el proyecto de comunicación de los señores senadores Brasesco y Lafferrère sobre reapertura de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Entre Ríos. Se aprueba. (Pág. 772.)

12.—Consideración del dictamen de la Comisión de Interior y Justicia en el proyecto de resolución del señor senador León y otros señores senadores sobre erección de un monumento e integración de una comisión bicameral de homenaje a los héroes muertos en Malvinas. Se aprueba. (Pág. 773.)

13.—Apéndices:

Sanciones del Honorable Senado. (Pág. 775.)

—En Buenos Aires, a las 18 y 11 del jueves 1º de marzo de 1984:

Sr. Presidente. — Queda abierta la sesión.

1

VERSIONES TAQUIGRAFICAS

Sr. Presidente. — De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 32, inciso 2º, del Reglamento del Honorable Senado, corresponde poner en consideración las versiones taquigráficas pendientes de aprobación, cuyo detalle se leerá por Secretaría.

Sr. Secretario (Macris). — (Lee):

6ª reunión, 3ª sesión extraordinaria, del 11 de enero de 1984; 7ª reunión, 4ª sesión extraordinaria, del 18 de enero de 1984; 8ª reunión, 5ª sesión extraordinaria, del 19 de enero de 1984; 9ª reunión, 6ª sesión extraordinaria, del 25 de enero de 1984; 10ª reunión, 1ª sesión especial extraordinaria, del 31 de enero y 1º de febrero de 1984; 11ª reunión, 7ª sesión extraordinaria, del 1º de febrero de 1984.

Sr. Nápoli. — Hago moción de que se den por aprobadas.

Sr. Presidente. — Se va a votar.

—La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente. — Quedan aprobadas.

2

ASUNTOS ENTRADOS

Sr. Presidente. — Por Secretaría se dará cuenta de los asuntos entrados.

Sr. Secretario (Macris). — (Lee):

Es así que esta convención nos enuncia uno de los conceptos más precisos que se han dado acerca de la vida. Persona es todo ser humano y decimos agregando esto al articulado, que a ese ser humano debe garantizársele su integridad física, psíquica y moral. Ese ser humano no puede ser sometido a tortura, trato degradante ni apresamiento arbitrariamente, como tampoco pueden atacarse su honra, su dignidad, su vida privada y la de su familia, violar su correspondencia, negársele el derecho al pensamiento y a la expresión, el derecho al nombre y al uso y goce de sus bienes. En síntesis, señor presidente, no puede negársele el derecho a la vida.

En este recinto debemos recordar a quienes les cupieron o les caben estas prescripciones, que la Convención Americana de los Derechos Humanos prohíbe expresamente la propaganda en favor de la guerra y toda apología del odio nacional.

Debemos enfatizar que el hombre y su vida no tienen fronteras, que a donde marcha el hombre, cualesquiera sean su ideología, nacionalidad o credo, marchan sus derechos, amparándolo con el tibio y generoso manto de la justicia. A donde va el hombre, marchan alegrías y angustias. Hasta donde el hombre marcha, llegará el derecho que lo ampare. Pero también suele ocurrir que se le nieguen sus derechos en su propio lugar de nacimiento; y también en este caso este instrumento jurídico acude a rescatar para el hombre los derechos que le son negados en su propia patria por monstruosas asociaciones ilícitas que se apropian de los pueblos y sus territorios.

Señor presidente: hoy, al ratificar con una profunda alegría la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ratificamos también nuestro compromiso severo y militante con el pueblo que nos ha votado y con los pueblos que, más tarde o temprano, han de unificarse para formar la gran patria de América latina. *(Aplausos.)*

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador por Río Negro.

Sr. Nápoli. — Como presidente del bloque de la Unión Cívica Radical, ratifico todo lo dicho por los señores senadores preopinantes, y quiero dejar expresado nuestro apoyo sin retaceos al Pacto de San José de Costa Rica.

Así, como hombre militante de la democracia y de la defensa de los derechos humanos, ratifico, como un canto a la vida, todos los conceptos referidos a la paz y a los derechos humanos, y afirmo que rechazamos todo lo que signifique opresión, persecución, tortura y muerte. *(Aplausos.)*

Sr. Presidente. — Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el proyecto de ley.

—La votación resulta afirmativa.

—En particular es igualmente afirmativa.

Sr. de la Rúa. — Señor presidente: solicito que conste que la votación ha resultado afirmativa por unanimidad.

Sr. Presidente. — Quedará constancia, señor senador.

Queda definitivamente sancionado el proyecto de ley. Se comunicará al Poder Ejecutivo.

En nombre del cuerpo, la Presidencia quiere expresar su reconocimiento a su excelencia, el señor embajador de Costa Rica, y a los señores presidente y secretario de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por haber asistido a esta sesión, que para nosotros tiene gran significación. *(Aplausos.)*

Sr. Gass. — Propongo que se pase a cuarto intermedio para acompañar a los ilustres visitantes.

Sr. Presidente. — Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la moción formulada por el señor senador por Buenos Aires.

—La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente. — Invito a los señores senadores a pasar a un breve cuarto intermedio.

—Son las 20 y 6.

—Se retiran del recinto el señor embajador de Costa Rica y los señores presidente y secretario de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, acompañados por varios señores senadores.

—A las 20 v 13.

4

PROGRAMA ALIMENTARIO NACIONAL

Sr. Presidente. — Continúa la sesión.

Han quedado reservados en Secretaría varios asuntos sobre los cuales debe tomar una decisión el cuerpo antes de entrar en el tratamiento del orden del día.

El primer asunto reservado es el proyecto de ley venido en revisión que establece el Programa Alimentario Nacional. Hay un dictamen de las comisiones de Asistencia Social y Salud Pública y de Presupuesto y Hacienda, cuya copia obra en poder de los señores senadores.

Sr. Trilla. — Señor presidente: ¿no se iba a tratar primero el Orden del Día N° 49?

Sr. Presidente. — Se tratará después, señor senador.

Sr. Otero. — Pido la palabra para una aclaración.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador por Buenos Aires.

Sr. Otero. — En el dictamen falta la firma del señor senador Feris, de la provincia de Corrientes, quien prestó su asentimiento durante su participación en las reuniones de comisión. Debido a una omisión involuntaria dicha firma no figura en el despacho.

Sr. Presidente. — Quedará constancia, señor senador.

Tiene la palabra el señor senador por Santa Cruz.

Sr. Almendra. — Hago moción de que este dictamen se trate sobre tablas.

Sr. Presidente. — Se va a votar la moción formulada por el señor senador por Santa Cruz.

—La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente. — Por Secretaría se dará lectura.

Sr. Secretario (Macris). — (Lee):

Dictamen de comisión

Honorable Senado:

Vuestras comisiones de Asistencia Social y Salud Pública y de Presupuesto y Hacienda han considerado el proyecto de ley en revisión sobre el Programa Alimentario Nacional y, por las razones que dará el miembro informante, os aconsejan la aprobación del siguiente

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

Artículo 1º — Facúltase al Poder Ejecutivo nacional para la realización de un programa destinado a enfrentar la crítica situación de deficiencia alimentaria aguda de la población más vulnerable y de pobreza extrema.

Art. 2º — El Poder Ejecutivo nacional dispondrá los relevamientos censales donde no los hubiere, de los cuales surgirán las necesidades y prioridades de aplicación, identificando a las personas que presenten el mayor riesgo de enfermar o morir por desnutrición. También requerirá de los diferentes organismos públicos, nacionales o provinciales correspondientes, la remisión de toda la información actualizada que posean.

Art. 3º — El conjunto de acciones dirigidas a tal fin será denominado en la emergencia Programa Alimentario Nacional, y será conducido por el Ministerio de Salud y Acción Social.

Art. 4º — El Programa Alimentario Nacional será administrado por una comisión ejecutiva designada por el Poder Ejecutivo nacional a propuesta del Ministerio de Salud y Acción Social, la que tendrá las siguientes atribuciones:

- Dirigir la ejecución del programa, disponer la contratación de insumos y servicios necesarios conforme a las leyes vigentes, controlar y evaluar el desarrollo del programa;
- Estimular la participación comunitaria y canalizar la solidaridad social para el desarrollo del programa;
- Concertar convenios con personas públicas y privadas.

Art. 5º — Las provincias coparticiparán en la ejecución del Programa Alimentario Nacional, a través de sus autoridades. Un organismo especial en cada provincia asegurará la coordinación entre el gobierno nacional y el gobierno provincial a los efectos del cumplimiento del Programa Alimentario Nacional.

Art. 6º — El Poder Ejecutivo nacional, a propuesta del Ministerio de Salud y Acción Social, designará una comisión asesora honoraria.

Art. 7º — A los efectos de la coordinación para la aplicación de esta ley en los ámbitos nacional y provinciales, el Poder Ejecutivo nacional hará partícipe al Consejo Federal de Salud.

Art. 8º — En la aplicación del Programa Alimentario Nacional se procurará fomentar y orientar la solidaridad social, la donación de bienes y servicios del trabajo voluntario, mediante la participación comunitaria y la difusión de los objetivos y contenidos del programa.

Las donaciones en dinero serán depositadas en cuentas especiales abiertas en el Banco de la Nación Argentina o los bancos oficiales de cada provincia con destino común al fondo del Programa Alimentario Nacional.

Las donaciones de bienes en ningún caso serán automáticas, sino que deberán ser aceptadas por los organismos de aplicación de la ley. No se aceptarán donaciones que signifiquen un estímulo a la alimentación artificiosa, antinatural o nociva para la salud o que no estén en perfectas condiciones de uso o conservación.

Art. 9º — Las donaciones en dinero o especies, sean éstas bienes o servicios, destinadas al Programa Alimentario Nacional serán deducidas a los fines de la determinación del resultado impositivo del impuesto a las ganancias. Esta deducción excluye, en su caso, la establecida en el inciso c) del artículo 74 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 1977 y sus modificaciones.

— Sin perjuicio del tratamiento establecido precedentemente, los donantes podrán computar como pago a cuenta de obligaciones emergentes por ejercicio fiscal de la donación en concepto de impuesto sujetos a régimen de la ley 20.221 y sus modificaciones incluidos anticipos hasta el diez por ciento (10 %) del monto donado, sin que dicho cómputo pueda generar saldo a favor.

Tratándose de los sujetos a que se refiere el inciso b) del artículo 48 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 1977 y sus modificaciones, el cómputo aludido será efectuado por el único dueño o cada socio en sus respectivas declaraciones individuales en

proporción a la participación que le corresponde en los resultados sociales.

Art. 10. — Se arbitrarán las auditorías correspondientes para evaluar el costo del programa y conocer las empresas que fueren beneficiarias del mismo.

Art. 11. — En los mecanismos de producción, compra y distribución:

- a) Se dará prioridad a los productos regionales que se adecuen al Programa Alimentario Nacional y su producción sea local;
- b) Se implementarán los medios necesarios para impedir toda destrucción especulativa de alimentos, que intente alterar la oferta o el precio de los mismos;
- c) Se podrá contratar la adquisición de los insumos del programa a través de la Junta Nacional de Granos, facultándose al Poder Ejecutivo nacional para autorizar a dicha Junta a ejercer la actividad comercial en los términos de su carta orgánica, respecto de los insumos, bienes y servicios no comprendidos en la misma, preferentemente los necesarios para el cumplimiento de esta ley;
- d) Se propiciará el estímulo de la alimentación natural y se promoverá la lactancia materna;
- e) No podrá participar como proveedora del Programa Alimentario Nacional ninguna empresa rural, industrial o comercial que no cumpla con los mecanismos de concertación o control de precios.

Art. 12. — El gasto que demande el cumplimiento de la presente ley será atendido mediante los créditos que designe a tal efecto el presupuesto general de la administración nacional para la jurisdicción del Ministerio de Salud y Acción Social.

Art. 13. — La duración del Programa Alimentario Nacional será de dos (2) años a contar de la puesta en marcha, y la ampliación del término será sometida a la aprobación del Poder Legislativo nacional.

Art. 14. — El Poder Ejecutivo nacional determinará las normas evaluativas del Programa Alimentario Nacional, a través de sus organismos competentes en el orden nacional y provincial.

Art. 15. — Queda prohibida la incorporación de propaganda partidaria a las actividades propias del Programa Alimentario Nacional.

Art. 16. — El Poder Ejecutivo nacional reglamentará la presente ley dentro de los sesenta (60) días de su promulgación.

Art. 17. — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de las comisiones, 29 de febrero de 1984.

Ramón A. Almendra. — Julio A. Amoedo. — Antonio O. Nápoli. — Ricardo E. Lafferrère. — Luis A. León. — Adolfo Cass. — Edison Otero. — Jorge A. Castro. — Francisco R. Villada. — Eduardo Menem. — Pedro A. Conchez. — Juan Trilla. — Rogelio J. Nieves. — Fernando de la Rúa. — Edgardo P. V. Murguía. — Humberto C. Sigal.

Sr. Presidente. — En consideración en general.

Tiene la palabra el señor senador por Santa Cruz.

Sr. Almendra. — Señor presidente, señores senadores: todos sabemos que el país está atravesando por una aguda crisis, que adquiere características de calamidad si se tiene en cuenta que resulta imposible pensar que en un país como el nuestro, donde sobreabunda el alimento, tengan que existir sectores en los que se enseñorean el hambre y la miseria.

Todos los días nuestros sentimientos se ven impactados frente a este drama de alcance nacional, ya que no existe lugar del país donde no haya carenciados, y esta situación se presenta como una atenta a una sociedad que no debe permitir que tales circunstancias continúen.

Por ello, la marginación del problema no puede constituir su solución, porque sería como querer ocultar el sol con la mano; eso no haría desaparecer al sol. Este drama debe ser atacado sin dilación; primeramente, en forma de emergencia, como anticipo de las soluciones integrales que habrán de sucederle, es decir, paliar en lo inmediato lo más urgente. Posteriormente, erradicar en forma definitiva ese flagelo, en el mediano plazo, en tanto la reactivación económica de la Nación lo vaya permitiendo y, de esa manera, realizar una efectiva justicia social.

Por eso resulta responsabilidad de todos esta inquietud y también la solución aportada, en la que la unidad de criterios conlleva a la unidad en la acción reparadora para dominar prontamente esta situación.

No obstante ello, este honorable cuerpo, a través de las comisiones de Asistencia Social y Salud Pública y de Presupuesto y Hacienda, considera necesario introducir cambios al proyecto remitido por la Honorable Cámara de Diputados, en la inteligencia de que las modificaciones efectuadas apuntan a un perfeccionamiento del instrumento legal y a un mayor ajuste del Programa Alimentario Nacional.

Fundamentalmente, se ha tenido en cuenta en su formulación la necesidad de tener presentes a las provincias, que habrán de sentir los efectos de su ejecución, con un sentido de participación integral que facilite la efectiva realización de todo lo previsto en dicho programa. Si bien se trata de un plan centralizado en su concepción, su ejecución ha de ser descentralizada.

Sin duda el sentido solidario de la ley habrá de obtener respuestas inmediatas en nuestro pueblo, manifiestamente presente en todo tipo

de empresas que, como la que consideramos, signifiquen extender una mano a los hermanos argentinos, severamente carenciados por los efectos de largos años de una insensibilidad gubernamental y económica que no ha tenido parangón en la historia de la Nación Argentina.

El país cuenta con los elementos necesarios para el cumplimiento de la ley, y su implementación se ha tratado de hacer lo más ágilmente posible, para que su efectivización se lleve a cabo en el menor tiempo, dando prioridad a los productos y economías regionales, y posibilitando que, además de producir un beneficio real al carenciado, se obtenga una reactivación de ellos, con el consiguiente efecto económico favorable.

No debemos permitir que en nuestro territorio se tenga que asistir al deprimente espectáculo de la depredación que significa destruir cosechas con fines especulativos y/o razones antieconómicas, cuando por otro lado la falta de los elementos que se destruyen propicia la aparición de la desnutrición infantil, la subalimentación de los habitantes más carenciados económicamente, y también —por qué no decirlo— el siniestro y vergonzante fantasma del hambre.

Por ello, unánimemente estas comisiones han refrendado el dictamen que se presenta, como manifestación de un pensamiento nacional común, donde la economía debe estar al servicio del hombre y no verse sujeto éste a los vaivenes nefastos de los intereses económicos.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador por Buenos Aires.

Sr. Otero. — El proyecto venido en revisión que hoy tratamos tiene la suficiente importancia y elocuencia como para que no me extienda demasiado. Por otra parte, ha sido muy bien explicado por el señor presidente de la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social.

Estamos discutiendo un proyecto que concierne a uno de los problemas más graves que afectan a la sociedad argentina: la desnutrición de aquellos sectores carenciados y acuciados por una emergencia aguda. El flagelo social del hambre ha constituido en nuestra América latina una epidemia con picos epidémicos que nos han avergonzado. La Argentina tenía el orgullo de que sus índices al respecto, así como otros muy significativos tales como los de analfabetismo y deserción escolar, ostentaban cifras propias de los países llamados desarrollados. Desafortunadamente, las políticas practicadas en los últimos años nos han hecho descender en esta escala

social y hoy la República presenta cifras que la colocan a la altura de los países más atrasados del globo. Como consecuencia de esas políticas recesivas por una parte y de la injusta distribución del ingreso por otra, la pauperización del pueblo es una realidad que debemos enfrentar revirtiendo todo el proceso de transferencia de ingresos en el orden interno y replanteando nuestra ubicación en una situación mundial que pretende mantener el desarrollo sostenido de los países del Norte a expensas de los del Sur.

Por supuesto, no es suficiente establecer determinada política económica para revertir el drama de la desnutrición. El esfuerzo que deberá realizar la Argentina para despegar del estancamiento económico es demasiado severo y demandará un lapso demasiado considerable como para permanecer aguardando sus resultados y paliar esta vergüenza del hambre en el país de las vacas y el trigo. Por ello, resulta imperioso instrumentar una política de emergencia toda vez que la misma es posible, y un imperativo ético nos lo exige. Proceder de otro modo implica condenar a millares de niños aún recuperables a sufrir mermas en sus facultades intelectuales que habrán de marcarlos durante el resto de la vida. Así no podrá edificarse sólidamente la democracia que pretendemos que hereden nuestros hijos y nietos.

Entre las causas directas de la desnutrición infantil podemos señalar las siguientes: por una parte, la inadecuada e insuficiente alimentación, debida directamente a la carencia de recursos; por otra parte, enfermedades sucesivas en ciertos niveles socioeconómicos bajos que desencadenan un círculo vicioso: desnutrición-infección-desnutrición.

Otro de los factores que ocasiona inadecuada alimentación lo constituyen las pautas culturales. Circunstancialmente también lo son las catástrofes telúricas y no telúricas que provocan el cierre de fuentes de trabajo, la pérdida de las cosechas, etcétera.

En los niveles sociales más bajos es donde se conjugan los factores económicos, sanitarios, ambientales y educacionales que, en mayor porcentaje, contribuyen a la desnutrición. En este sector pueden distinguirse grupos de mayor vulnerabilidad, aun cuando todos los individuos puedan sufrir potencialmente los efectos de una alimentación deficiente.

En esos grupos está bien marcada la situación de los niños, cuyos requerimientos nutricionales son más exigentes debido a su condición de seres en crecimiento. No sólo deben vivir y mo-

verse como los adultos sino que necesitan acumular reservas para la formación de la nueva masa corporal.

El niño, durante su primer año de vida, resulta más vulnerable debido a que atraviesa la etapa de más rápido crecimiento. Otro grupo de extrema vulnerabilidad es el formado por las embarazadas y las nodrizas. Una mujer embarazada, alimentada adecuadamente, asegura el correcto crecimiento del feto y el nacimiento del niño con el peso adecuado. Esto está asociado con la minimización del riesgo de mortalidad y de las enfermedades durante el primer año de vida. Paralelamente, la correcta alimentación durante el embarazo asegura su buen desempeño como nodriza, habida cuenta de que la acumulación de grasas proveerá casi la tercera parte de las calorías con las que alimentará a su hijo.

Como el Honorable Senado habrá de apreciar en el tratamiento en particular del proyecto al que ya ha dado sanción Diputados, éste está dirigido principalmente a los sectores y grupos someramente delineados.

Para la consecución del fin perseguido, se ha recurrido a la información censal y estadística existente, sin perjuicio de efectuar los relevamientos que fueran necesarios. Tanto en esta tarea como en la de ejecución del programa es propósito claramente explicitado el de incorporar a todas las provincias en un esfuerzo de carácter nacional. Esto se llevará a cabo asumiendo el concepto de solidaridad como valor insustituible en el correcto desarrollo del plan.

El concurso provincial previsto procura, además de lo señalado, respetar las características propias de cada región, valorando el esfuerzo realizado hasta el presente.

Es oportuno señalar la diferencia entre las cifras de las distintas provincias en el ítem que nos ocupa. El ejemplo más extraordinario es el de la provincia del Neuquén que, a través de un programa sostenido durante varios años, ha logrado un bajo nivel de mortalidad infantil. Es así que el estado nutricional desde los seis meses hasta el primer año de vida está a la altura de los países más desarrollados del mundo. Las cifras demuestran que el porcentaje de niños con pleno desarrollo —llamados eutróficos— a los seis meses es del 95 por ciento y al año, del 88 por ciento. Con respecto a los desnutridos en grado 3, a los seis meses es del 0,1 por ciento, y al año del 0,2 por ciento.

No quisiera comparar estas cifras con las del conurbano de la provincia de Buenos Aires —de

una provincia supuestamente rica— ni con las de otras provincias del Noroeste, para que no nos avergoncemos.

Por supuesto, que el programa cuya aprobación requerimos de vuestra honorabilidad no agota en sus provisiones toda la gama de soluciones posibles para el mal que enfrentamos. El mismo constituye una solución de emergencia, destinada a los niños hasta los seis años de edad y embarazadas hasta el tercer mes de gestación. En manera alguna se excluyen los aportes que se puedan efectuar por vía de los demás programas en marcha, como los comedores escolares, los planes materno-infantiles, etcétera.

Pero, en cualquier caso, las soluciones de fondo habrán de llegar por vía de un crecimiento económico sostenido, que se acompañe de una más justa distribución del ingreso nacional. Y esto es así, no por una visión economicista de los problemas nacionales, sino por la concepción antropocéntrica que de la política sustentamos: el hombre y el desarrollo en plenitud de todas sus facultades es para nosotros el imperativo moral y la democracia, el marco adecuado para que el ser humano pueda arribar a tal objeto.

Sirva esto para demostrar fundamentalmente que la acción adecuada y sostenida de un programa puede dar lugar en nuestro país a que la realidad no nos avergüence, como sucede ahora.

Por todo esto pido al cuerpo su apoyo para este proyecto de ley que tiene aprobación de la Cámara de Diputados.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador por el Neuquén.

Sr. Solana. — He escuchado con atención las breves y precisas exposiciones de los señores senadores, y como representante del Neuquén recojo el elogio que al plan de salud acaba de manifestar el señor senador Otero.

Es cierto que el Movimiento Popular Neuquino, en un plan cuya aplicación ya lleva veinte años, con las interrupciones propias de los desgobiernos militares, tiene organizado un Sistema Provincial de Salud que la Organización Mundial de la Salud de las Naciones Unidas ha tomado como modelo y que se aplica actualmente en algunos países africanos. El esfuerzo del gobierno provincial en el ejercicio de atribuciones propias, con sus funcionarios y sus organismos, pudo desarrollar ese sistema de salud.

Por eso, al analizar el proyecto que tenemos en consideración y que llegó a las bancas de los senadores en el curso de esta sesión, yo deseo hacer algunas observaciones para que sean tenidas en cuenta sobre todo en el tratamiento

en particular, con el objeto de que la participación efectiva de las provincias a que aludió el señor miembro informante sea una realidad en los hechos concretos. Nosotros hemos aprendido en nuestra historia institucional que el avance del centralismo capitalino sobre el interior del país no se ha ejercido tanto por la penetración directa de los funcionarios y autoridades nacionales, sino por la declinación voluntaria de las atribuciones del Congreso Nacional, que no aplicó en su plenitud las facultades que le otorga el artículo 67 de la Constitución.

Como senador del Neuquén debo decir que he contraído con el pueblo que me trajo a este recinto el compromiso de acentuar en cada oportunidad la defensa de las autonomías provinciales, para que el ejercicio de aquellos derechos sea una realidad y no una ilusión. Para que esos derechos puedan realizarse en la práctica no solamente es necesario que se reconozca la ejecución de los planes formulados por las autoridades nacionales, sino que hace falta participar en la planificación de los programas mismos. De lo contrario se corre el riesgo de que las autoridades provinciales sean meras receptoras de los paquetes que les manda la burocracia capitalina.

Entonces, como quiero ponerme a la altura de los señores senadores preopinantes en cuanto a su claridad y brevedad, solamente quiero pedir que en la discusión en particular, y sobre todo al tratar el artículo 2º, se considere la posibilidad de que el Poder Ejecutivo nacional recabe de las provincias la realización de los relevamientos censales donde no existieran.

El artículo mencionado dice que el Poder Ejecutivo nacional dispondrá los relevamientos censales donde no los hubiere, pero ocurre que la mayoría de las provincias tiene censos hechos por las autoridades municipales, por las comisiones de fomento y por organismos provinciales como los ministerios de Salud Pública; es decir que ya existen esos censos. Por razones de economía y de prontitud bastaría con recabar esa información a cada provincia. Solamente si no existiera, el Poder Ejecutivo solicitaría su obtención.

Sr. Otero. — ¿Me permite una brevísima interrupción el señor senador?

El último párrafo del artículo 2º es bien explícito. Dice: "También requerirá de los diferentes organismos públicos, nacionales o provinciales correspondientes, la remisión de toda la información actualizada que posean". Esa fue una corrección practicada a instancia de varios

señores senadores, que nosotros aceptamos con mucho gusto.

Esto significa, señor senador por el Neuquén, que la aclaración pedida ya figura en el artículo 2º.

Sr. Sánchez. — Señor presidente: estamos tratando el proyecto en general, y el señor senador por el Neuquén está haciendo consideraciones en particular. Eso debe hacerse en el momento del análisis de cada uno de los artículos que componen el proyecto.

Sr. Solana. — La observación es correcta.

El propósito que he tenido al hacerlo de esta manera es el de simplificar. Como quiero ser muy breve, con dos o tres observaciones más terminaría mi exposición y entregaría a la mesa estas observaciones para ser tenidas en cuenta, si es que el señor senador no tiene inconveniente.

Me referiré al artículo 3º que dice: "El conjunto de las acciones dirigidas a tal fin será denominado en la emergencia Programa Alimentario Nacional, y será conducido por el Ministerio de Salud y Acción Social". Sugiero que se agregue: "... juntamente con los ministerios de Salud Pública y Bienestar Social de cada provincia".

Sr. Almendra. — Cuando se considere en particular el articulado se advertirá que lo que acaba de señalar el señor senador por el Neuquén está contemplado. Por eso quisiera adherirme a la posición del señor senador Sánchez, que seguramente es coincidente con el pensamiento de la bancada radical.

Sin perjuicio de permitir al señor senador terminar su exposición haciendo las observaciones a los artículos, según su criterio, entiendo que ello debe ser motivo de la consideración en particular.

Sr. Solana. — En vista de estas observaciones reiteradas, que las comprendo perfectamente por la forma en que he debido afrontar este debate, para no hacerlo desprolijo voy a dar por terminada mi exposición, manifestando desde ya nuestro voto afirmativo en general y reservándome el derecho, en caso de estimarlo necesario, de hacer algún tipo de aclaración en la discusión en particular.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador por La Rioja.

Sr. Sánchez. — Señor presidente: no quedaría tranquila mi conciencia si no hiciese algunas reflexiones sobre este proyecto que es muy doloroso, porque nos está señalando en forma

descarnada el drama que vive nuestro país. Si no fuese tan trágico, pensaríamos que estamos debatiendo un problema de asistencia alimentaria en cualquier república del globo. Pero es aquí, en la Argentina, donde estamos votando una ley para asistir a casi la mitad de los habitantes con alimentos para que puedan subsistir. En esta Argentina que todos los años se jacta de tener cosechas récord, que ha logrado superar los cuarenta millones de toneladas de cereal, ¿cómo es posible que lleguemos a una situación como ésta? A raíz de una política económica falaz, ha decrecido el número de cabezas de ganado vacuno, estimándose en más de diez millones de vientres, cuando en esta materia habíamos llegado a contar con más de cuarenta y cuatro millones de cabezas, que constituyen las bases de las proteínas que siempre consumió nuestro pueblo. ¿Cómo es posible que estemos hablando de hambre, teniendo en cuenta todas las riquezas alimenticias que produce nuestro país?

Este drama nos está mostrando cuál ha sido el resultado de un plan diabólico de la sinarquía, que nos ha aprisionado en los tentáculos de un supuesto eficientismo, para llegar a esta situación en la que el hombre argentino no puede alimentarse adecuadamente, para conformar el ser humano fuerte que pueda realizar las tareas de construcción y de mantenimiento en nuestro país.

¿Cómo es posible hablar de desnutrición, de morbilidad, de mortalidad infantil como consecuencia del hambre? Leímos con todo dolor que en Salta habían muerto hace poco cuatro niños por efecto del hambre, cuando esa provincia es la principal productora de porotos. ¿Cómo es posible el raquitismo en este país de la abundancia?

Lo que sucede es que esa trampa en la que caímos en marzo de 1976 es la responsable de este estado de cosas. Hace un rato nos referíamos a los derechos humanos y mencionábamos con toda emoción el derecho a la vida. Ese gobierno despótico, impío y cruel ha violado los derechos humanos no sólo en las mazmorras de la dictadura sino que lo ha hecho sometiendo al pueblo argentino al hambre y a la desesperación.

Por eso resulta una cruel ironía que, en el más alto estrado parlamentario de la República, estemos tratando un proyecto para asistir a nuestros hermanos que gimen bajo el dolor que significa no poder subsistir en su condición de seres humanos. Por eso, con el profundo dolor que siento y en mi condición de argentino, de hombre, de ciudadano del mundo, no puedo dejar de mar-

car a estos canallas que nos han llevado a este estado de cosas y que nos está mostrando que la crisis del país es estructural y que habrá que transformar, cambiando ese estado para que el hombre que realiza su esfuerzo tenga la justa distribución de la riqueza que crea, y no deba soportar la humillación de recibir esta ayuda que se le da porque no se le permite ganar el pan con el sudor de su frente, de acuerdo con el mandato bíblico.

Es necesario reflexionar sobre este punto que nos muestra cómo el poder mundial del dinero, que ha diagramado ese plan que se nos aplicó durante ocho años, nos ha llevado a un estado sobre el cual todos los argentinos debemos reflexionar, a la vez que tenemos que despertar ante la cruel realidad.

Además, no hace muchos años, el señor McNamara nos aconsejaba que controlásemos la natalidad. En este inmenso territorio de casi tres millones de kilómetros cuadrados, con sólo veintiocho millones de habitantes, pretenden controlarnos la natalidad. ¿Cuál es el objeto de estas insinuaciones? El objeto de estas insinuaciones, señor presidente y Honorable Cámara, no es otro que el hecho de que este país esté manejado por las multinacionales, por el poder oscuro del dinero, de ese dinero que ahora nos está imponiendo condiciones para refinanciar la deuda externa que, como ya lo dije en otras oportunidades, no la contrajeron los argentinos, sino una minoría al servicio de esos intereses y de los de ellos, pero que la tendremos que pagar todos nosotros.

Por eso resulta una amarga ironía tener que tratar un proyecto de esta naturaleza. Esto viene a llamarnos a todos los argentinos para unificar el esfuerzo y poner el hombro con miras a la reconstrucción y con el fin de que nunca más en nuestro querido país vuelvan los usurpadores, que no son sino los sirvientes de los grandes intereses que manejan el mundo.

Es necesario que tengamos conciencia de la capacidad y del potencial económico de que dispone la Argentina que, puestos al servicio de todos sus habitantes, coadyuvarán a que éste sea un país de abundancia; además, tendremos grandes excedentes para paliar el hambre de la humanidad, que no es otra cosa que una afrenta al género humano.

En realidad, debería votar en contra de un proyecto de esta naturaleza, pero también hay una realidad que no puedo desconocer. Se trata de esta realidad afligente y dramática que me obliga a dar el voto favorable, como un acto de solidaridad con mis hermanos y, también, como un compromiso para bregar incansablemente por

la instauración de la auténtica justicia social que nace de una independencia económica que debemos conseguir a toda costa; también debemos hacer cualquier sacrificio para que así, en este país, de una buena vez por todas, como dijera Perón, haya menos ricos, pero también menos pobres.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador por Formosa.

Sr. Vidal. — Señor presidente, señores senadores: la iniciativa que hoy llega sorpresivamente a este recinto, en rigor de verdad no necesitaría de una ley para su instrumentación, ya que el Poder Ejecutivo cuenta con las atribuciones suficientes para poner en práctica planes de ayuda a las poblaciones en caso de aguda emergencia. De haberse adoptado este criterio se hubiese ganado mucho tiempo aunque, digámoslo también, el tema no habría estado rodeado de la espectacularidad promocional que le confiere el tratamiento parlamentario.

En la Cámara de Diputados se argumentó que, por vía de esa discusión, se convocaría a la solidaridad nacional en torno a este drama que tan hondamente lacera la conciencia colectiva. Asimismo, un representante de un bloque de la minoría afirmó que la consideración parlamentaria resultaba indispensable ya que la instrumentación de un plan de este tipo genera gastos.

En realidad, ni una cosa ni la otra son del todo ciertas. Es decir, el gobierno habría contado con la solidaridad nacional con sólo convocar al pueblo y a sus organizaciones representativas. De la misma forma, para la aprobación de los gastos hubiera bastado con incluir las respectivas partidas en el proyecto de presupuesto actualmente en preparación.

Tampoco habría hecho falta, señor presidente, el solemne juramento formulado por el presidente de la República durante la campaña electoral, de acabar con el hambre en la Argentina. Y no hubiera hecho falta porque éste es el compromiso que los militantes políticos asumimos desde el mismo momento en que nos entregamos a esta riesgosa pero cautivante vocación del servicio público.

El proyecto llegado a este recinto, incluidos los enriquecimientos que se hicieron durante el debate en Diputados, no avanza mucho más allá de esas promesas. Sólo nos dice que el Estado reclama una ley para asistir a aquella parte de la población que se encuentra en estado de carencia aguda y pobreza extrema. No menciona en qué consistirá la ayuda asistencial a brindar ni los medios a través de los cuales será imple-

mentada, así como tampoco la población que abarcaría y, mucho menos, los medios económicos que se requieren.

La imprecisión no pasó por alto en la Cámara de Diputados, la cual para salvarla en parte autoriza al Poder Ejecutivo a disponer —y aquí cito textualmente— “los relevamientos censales de los cuales surgirán las necesidades y prioridades de aplicación, identificando a las personas que presentan mayor riesgo de enfermar o morir por desnutrición”.

No sería menudo el trabajo de preparar este censo y efectuar las evaluaciones previas a su implementación operativa. El país carece de experiencia en esta materia. Ni siquiera sabemos con precisión cuántos son los argentinos alcanzados por la zozobra de la desocupación o la subocupación. Sólo conocemos lo que nos dicen las estadísticas oficiales en base a relevamientos muestrales, que consideran ocupada a toda persona que en la semana anterior a la realización de la encuesta hubiera trabajado aunque sea una hora en forma remunerada. De acuerdo con este procedimiento se han detectado aproximadamente 660 mil desocupados y 900 mil subocupados.

¿Cuál sería, entonces, la forma de determinar quiénes de estos carenciados son los más necesitados? ¿Quiénes los que se encuentran en el caso tipificado en el artículo 1º del proyecto, o sea, los encuadrados en la crítica situación de deficiencia alimentaria aguda de la población más vulnerable y en condiciones de pobreza extrema?

Quizá se avanza un paso en la definición de la tipología carencial cuando se alude a ella como aquella capaz de conducir en forma inmediata a la enfermedad o muerte por desnutrición. Pero, ¿cómo se comprobaría esto? ¿Mediante revisiones médicas? ¿Cuáles serían los procedimientos censales para determinar la situación? ¿Cuál el personal especializado habilitado para hacerlo?

Todo esto demandará mucho tiempo; un tiempo durante el cual seguirán muriendo niños por falta de alimentos, la desigualdad social continuará incubándose en el déficit proteínico, y los estigmas de la morbilidad por desnutrición seguirán causando estragos en todos los niveles, pero fundamentalmente en la niñez y la vejez.

Caemos así en la cuenta de que falta todo elemento objetivo de análisis sobre la población beneficiaria estimada, los niveles carenciales observados, los métodos alternativos para identificar a los presuntos beneficiarios y las características generales o particulares de la estructura

técnico-administrativa necesaria para la ejecución del programa.

Los criterios de selección para tipificar los alimentos a proveer; los dispositivos para su concentración, clasificación, conservación, transporte y distribución, y los efectos previstos de la demanda adicional de alimentos en la industria y el mercado imposibilitan evaluar la profundidad y extensión del proyecto y nos dejan a ciegas en relación a sus reales posibilidades de implementación y financiamiento.

Se autoriza a un espectro tan amplio y vago que el Poder Ejecutivo puede disponer desde la simple y relativamente sencilla habilitación de comedores escolares hasta complicados mecanismos de racionamiento.

Tendremos que esperar seguramente hasta la sanción del presupuesto para contar con alguna idea más o menos certera de lo que se piensa hacer.

Tanta improvisación da la impresión de que hay más interés en promocionar el presunto cumplimiento de una promesa electoral que de dar solución rápida y efectiva al tema que nos preocupa.

Tampoco sabemos por cuánto tiempo se extenderá el estado de emergencia. El proyecto habla de dos años, pero autoriza a los poderes nacionales a prorrogar dicho plazo si fuera necesario. Estas deficiencias serían suplidas por vía de reglamentación. Pero vale la pena tener en cuenta que la sana práctica legislativa aconseja definir en la ley los aspectos fundamentales que concurren a la configuración de los perfiles básicos del instrumento legal que se crea, dejando a la reglamentación las cuestiones de detalle de la norma.

Por último, llama la atención la falta de toda mención específica a la problemática del subdesarrollo como explicación última del hambre y la marginalidad. Es cierto que el mensaje del Ejecutivo reconoce como raíz del problema "la falta de crecimiento económico y la injusta distribución de los ingresos" —estoy citando textualmente—, pero esa argumentación parece débil e insuficiente para una correcta caracterización del problema.

La contradicción más profunda de nuestro tiempo es la que cruza la geografía mundial con un paralelo diferenciador entre Norte y Sur, que es como decir entre opulencia y subdesarrollo.

Hace veinticinco años, cuando el desarrollismo irrumpía en la vida política argentina, definimos a la realidad nacional como caracterizada por el subdesarrollo. No faltaron quienes nos seña-

laron entonces las diferencias entre la situación argentina y la de otros países atrasados, basadas en estadísticas acerca de la cantidad de automóviles, televisores, matrículas universitarias y otras mediciones de orden cuantitativo. Dijimos entonces —y lo repetimos hasta el cansancio— que el del subdesarrollo era un problema de orden cualitativo, definido por la incapacidad de la economía de crecer a ritmo sostenido con sus propios recursos.

Dijimos también que se trataba de una cuestión de orden acumulativo. En la medida en que los países subdesarrollados transfieren riquezas a los desarrollados, a través de la relación de intercambio, se produce un fenómeno de pauperización relativa.

La consecuencia de la política económica aplicada en los últimos siete años, entretejiendo sus nefastas hebras sobre el cañamazo del subdesarrollo, transformó ese empobrecimiento relativo en empobrecimiento absoluto. No es extraño, entonces, que los jinetes del Apocalipsis cabalguen hoy sobre territorio argentino.

Pero sería un error suponer que la "marginalidad" es una consecuencia exclusiva de estos desoladores siete años del proceso, en la medida en que no pongamos en claro la necesidad de promover una vigorosa política de desarrollo, en la medida en que no acertemos con los mecanismos instrumentales para promoverla, en la medida en que carezcamos de la decisión política para darle a la transformación de fondo requerida, el ritmo que hace falta.

En esa misma medida, señor presidente, el hambre y la existencia de vastas regiones del territorio sometidas a la desolación y a la subsistencia de condiciones de vida y atraso incompatibles con el mundo de nuestros días seguirán patentizando el drama de un país que, contando con innumerables recursos, vegeta en la pobreza y el estancamiento.

Hoy y acá, la lucha contra el hambre y la miseria implica la inserción de los mecanismos de emergencia que se implementen para paliar los problemas más acuciantes desde el punto de vista social en un plan global que se proponga, en el lapso de unos pocos meses, revertir la línea de decadencia que viene siguiendo la Nación, para movilizar su enorme masa de riquezas dormidas.

Y ésta es otra de las incongruencias que se advierte en este proyecto que se nos remite para su aprobación. Mientras se propone un plan para aplacar el hambre, la política económica proyectada desde el Poder Ejecutivo antepone la lucha contra la inflación al lanzamiento, ya

mismo, de una vigorosa política de reactivación. En consecuencia, los controles de precios y el incremento de los impuestos son colocados en el centro de la escena, en lugar de una política de fondo que todo el país está reclamando clamorosamente.

Llegamos, así, al punto en que los propios voceros oficiales vaticinan, en sus cálculos más optimistas, un crecimiento del cinco por ciento en el producto bruto interno para el año en curso, porcentaje irrelevante si tomamos en cuenta el profundo valle en que ha caído la economía argentina; y una mejora del salario real del ocho por ciento, cuando la realidad indica que el costo de una canasta familiar equivalente a la del año 1960 es de más de nueve mil pesos, suma que no alcanza a ser compensada, en un cincuenta por ciento, por el salario medio actual.

Al mismo tiempo, se advierte la falta de una política crediticia que apuntale la reconstrucción del aparato productivo, la rehabilitación de la capacidad ociosa, la recomposición de los capitales de trabajo y la restauración del núcleo de la inversi^on.

Se redondea así el círculo vicioso. No hay rehabilitación del mercado interno, porque no hay aumento sustancial del salario; no hay absorción de la mano de obra desocupada, porque la reducida dimensión del mercado y la carencia crediticia impiden expandir la actividad económica.

Como consecuencia de todo ello, la crisis mantiene sus perfiles más negativos y este tipo de planes, que deberían ser meros instrumentos temporales para salvar una coyuntura especialmente dramática, corren el peligro de eternizarse como imperfectos sustitutos de una economía que, funcionando a pleno y creciendo, debe ser capaz de darle a todos los habitantes de nuestra pródiga tierra argentina el derecho al pan, al techo, a la cultura, al bienestar y a la libertad, como síntesis expresiva de las expectativas más acuciantes del hombre de nuestro tiempo.

De todas maneras, señor presidente, respondiendo a los fines de solidaridad social invocados por el Poder Ejecutivo y teniendo en cuenta la necesidad de paliar carencias que ofenden a la dignidad y agreden a la conciencia argentina, adelanto mi voto favorable a este proyecto, en general. Pero hago reserva del derecho de seguir reclamando soluciones de fondo que vayan más allá de los paños tibios, así como también reivindicó el derecho de esta Honorable Cámara de solicitar al Poder Ejecutivo precisión y claridad en la elaboración de los proyectos que remite para su consideración.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador por Entre Ríos.

Sr. Brasesco. — Señor presidente: voy a decir simplemente unas palabras para que la Comisión de Familia y Minoridad no quede ausente de este debate.

Este proyecto de ley, por sobre todas las consideraciones que se han formulado, consagra varios principios fundamentales: la preservación del derecho a vivir, la protección de la familia y la concreción de una comunidad de amor.

Hace pocos minutos que, por el voto unánime del Senado de la Nación, hemos aprobado una convención sobre derechos humanos que consagra el derecho a la vida. No se trata solamente del derecho de gozar del aire y de ver el cielo sino que también es el derecho que tiene la criatura humana de preservar su vida, desde el vientre de la madre hasta el día de su muerte.

Este proyecto tiende a que el niño tenga derecho a las medidas de protección que su condición de menor requiere, no solamente por parte de su familia y de la sociedad sino también del Estado.

Este proyecto de ley también tiende desde el punto de vista normativo a fomentar y orientar la solidaridad social, que significa lisa y llanamente el derecho de tener una comunidad basada en el amor, como lo dice en sus encíclicas el papa Juan Pablo II.

Señor presidente, señores senadores: éste es un proyecto de ley que, por sobre los aspectos reglamentarios o normativos, nos enseña a ser un poco más buenos, un poco más generosos, a mirarnos más como hermanos, a vivir en serio el derecho a la vida y a la solidaridad y a cumplir el inexorable deber que todos los seres humanos tienen de actuar como buenos padres y buenas madres, no sólo con sus hijos sino también con los hijos de sus hermanos.

En nombre de la Comisión de Familia y Minoridad, que presido, la que no ha tenido el honor de compartir las deliberaciones que otras comisiones sostuvieron al considerar este proyecto de ley, manifiesto nuestro mayor júbilo, deseando que este instrumento sea perfeccionado en el futuro y que sirva fundamentalmente para luchar contra el desamparo de la niñez, contra el hambre y la miseria.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador por Buenos Aires.

Sr. Gass. — Después de escuchar las palabras del señor presidente de la Comisión de Asistencia Social y Salud Pública, mi distinguido y doble colega, el senador Almendra, y a mi compa-

fiero de bancada, el senador Otero, pensaba que, tal vez por una deformación profesional, los médicos tenemos esa especial sensibilidad que resulta de ver y tocar todos los días el dolor, el hambre, la desnutrición, las enfermedades sociales. Asimismo, al escuchar la preocupación del señor senador por Neuquén, que manifestaba su complacencia por la información dada por el señor senador Otero sobre el brillante trabajo de salud pública que desde hace años se realiza en Neuquén, pensaba que este Senado debía sentir el mismo dolor y que, en lugar de descender a un debate en el que se nos ataca porque realmente queremos cumplir con nuestros compromisos electorales, deberíamos decir qué está pasando y cómo lo vamos a remediar.

Acepto el desafío que nos hace el señor senador por el MID, en cuanto a nuestra disposición para cumplir con los compromisos electorales. Dijimos en todas las tribunas que ocupamos en el país —y lo dijo nuestro candidato a presidente de la República— que estábamos avergonzados por la larga noche que vivíamos y que ya nos comparaban por nuestros índices de mortalidad infantil, sin que esto importe un desmedro hacia ellos, con algunos países africanos, y de los menos desarrollados. Coincidió entonces con el senador Almendra cuando dice que todos somos plenamente conscientes del grave grado de desnutrición y carencia alimentaria que aflige a una amplia franja del país.

Estoy convencido de que, si hubiera habido algún deseo por parte del Poder Ejecutivo de ejercer un mando absoluto, habría tomado esta decisión por un simple decreto, tratando así de capitalizar el efecto político, si es que tiene alguno. Pero no es esa la intención de un gobierno de la democracia, de un gobierno republicano, que envía como proyecto de ley al Parlamento, para que lo discutamos, todo lo que piensa, siente y cree que hay que hacer en el país.

El flagelo de la desnutrición se hace más notorio en miles y miles de niños argentinos, a los que les ocasiona daños físicos y mentales que probablemente nunca puedan ser reparados. Las carencias alimentarias en los niños producen trastornos en las células nerviosas, que no se recuperan con facilidad o son irreversibles. En vez de discutir en este momento, entonces, la política económica del país, para lo cual ya habrá tiempo, tenemos que dedicarnos a analizar si este proyecto es bueno o malo.

El señor senador por Neuquén tiene algunas modificaciones para proponer respecto de ciertos artículos. Creo que es correcto que las proponga y, eventualmente, que la comisión las

accepte. Pero es evidente que no podemos esperar los efectos de la política económica que quiere el senador por el MID cuando, como todos sabemos, el cuadro es tan acuciante. Somos conscientes de la grave coyuntura que aflige a vastos sectores de la población y debemos actuar con estas medidas de emergencia. Hoy, más que un tema de sanidad, tocamos uno de solidaridad. Se trata de un problema de toda la comunidad. No puede haber chicanas políticas ni enfrentamientos políticos cuando se trata de los hijos del país, y es un problema de prioridad que atañe a la Argentina en su conjunto, sin parcialidades políticas. Todos nos enfrentamos con esta realidad. A la fecha, contamos con más de un millón de niños afectados por esta situación, condenados por el hambre a morir o a vivir en condiciones penosas.

El hambre está, existe, es una realidad. Las enfermedades sociales también y afectan a todos. De todos es la responsabilidad: de las mayorías y de las minorías. Este proyecto que estamos tratando, señor presidente, es el primer paso que nos permite dar esta coyuntura, para iniciar el camino que nos llevará a una sociedad donde nunca más un niño muera por desnutrición en nuestro país.

Como ya lo señalamos, este plan deberá implementarse a través de políticas de mediano y largo plazo en áreas alimentarias y nutricionales. Pero no estamos en condiciones de esperar los efectos que ellas producirán. Necesitamos contar inmediatamente con un instrumento idóneo y estoy convencido de que hoy lo obtendremos.

Estamos en una coyuntura en que las soluciones pasan por la resolución de los problemas de emergencia. Con ese convencimiento el Poder Ejecutivo ha elaborado este proyecto.

Por otra parte, señor presidente, debemos destacar que esta ley no agravará la situación actual de la burocracia del Estado. Basta con leer su articulado para darse cuenta de ello, ya que aprovecha las estructuras existentes, creando un sistema de ejecución descentralizada, con amplia participación de las provincias y los municipios. Esto, a su vez, implica respeto por los principios federales de nuestro orden institucional.

Además, como ya lo señalé, se trata de un proyecto coyuntural que no tendrá permanencia en el tiempo más allá del que resulte necesario para la concreción de las políticas económicas que tenderán a la solución definitiva de estos problemas.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador por Buenos Aires.

Sr. Otero. — Quiero hacer referencia brevemente a las manifestaciones formuladas por el señor senador por Formosa.

De su exposición he rescatado tres conceptos fundamentales. El primero, está vinculado con la puesta en marcha del plan. Tanto el señor senador Almendra como quien habla, hemos conversado mucho sobre este tema durante los últimos quince días. Tratar de explicitar en una ley el procedimiento a seguir, significaría escribir más de un volumen.

En segundo término, el señor senador por Formosa se refirió al diagnóstico. El presidente de la Comisión de Asistencia Social y Salud Pública y yo somos médicos; sabemos perfectamente cómo se definen los factores de riesgo, los diagnósticos y los sectores vulnerables. En ningún momento pretendimos actuar como "maestros ciruela" de los señores senadores, aunque hubiera sido muy simple hacerlo.

El tercer elemento que he rescatado de la brillante exposición del señor senador por Formosa, es el relacionado con la política económica. Todos conocemos cuál es la filosofía de la política económica del Movimiento de Integración y Desarrollo. No viene al caso analizarla en este momento. Seguramente, esta Honorable Cámara tendrá en el futuro inmediato numerosas oportunidades en que dicha filosofía se verá enfrentada con otras que sustentan los demás sectores de la Cámara.

De los tres elementos que él señaló, debo decir que la puesta en marcha es prácticamente imposible plasmarla en una ley; con respecto al diagnóstico, es de fácil definición y, por último, en lo que se refiere a la política económica, el señor senador por Formosa tendrá la oportunidad en un plazo muy breve, de discutirla con todos los bloques que integran este Honorable Senado.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador por Santa Cruz.

Sr. Almendra. — Como presidente de la Comisión de Asistencia Social y Salud Pública y senador de la bancada justicialista puedo decir que con mis compañeros de comisión hemos hecho todas las observaciones y las preguntas necesarias con respecto a este plan. Nosotros hemos dicho desde que asistimos a esta Honorable Cámara que por encima de las situaciones partidarias estaba algo que viene muy ligado a nuestra doctrina: que primero está el país, la Nación. Y hemos afirmado que siempre vamos a tratar de que eso se cumpla y que en la medida de nuestras fuerzas la oposición que ejerzamos será siempre constructiva.

Por eso nuestro bloque, a través de los senadores que integran las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Asistencia Social y Salud Pública, siempre ha tratado de mejorar lo que fuera posible y de conseguir que el federalismo sea efectivo. Por eso, como lo dije en la fundamentación del pedido de aprobación de este proyecto, hemos llamado a los asesores y responsables del Ministerio de Salud y Acción Social de la Nación para que se nos informara acabadamente sobre todas las inquietudes surgidas de los colegas senadores de las distintas extracciones.

Hemos puesto también el mayor celo en la redacción de cada uno de los artículos, para que ese aspecto no quede librado al azar. Es cierto lo que acaba de manifestar mi doble colega, el senador doctor Otero, al decir que ha primado en nosotros un espíritu de solidaridad. Eso es lo que nos ha llevado a tratar de aunar voluntades para tener un despacho unánime de la comisión.

Y como final de mis palabras voy a agregar que la única verdad es la realidad, como lo dijo nuestro general. Pero aunque nos duela, desgraciadamente los argentinos tenemos que reconocer que es cierta la afirmación del señor senador Sánchez: en este país de la abundancia de cereales y proteínas rojas debemos llegar a tratar este doloroso tema porque la realidad es el hambre que padecen muchos de nuestros ciudadanos.

Además quiero repetir que "mejor que prometer es realizar", y nosotros estamos en esa tesitura, pues si bien muchas cosas serían perfectibles y tal vez en algún momento haya habido algún tipo de resquemores, pensamos que todos los argentinos bien nacidos estarán imbuidos del ideal de que primero está la patria y, por último, los hombres.

Es por eso que, como presidente de la Comisión de Asistencia Social y Salud Pública, que ha analizado este programa que hoy tratamos, y en nombre de nuestro bloque, manifiesto nuestro apoyo en general y en particular.

Por último, quiero solicitar a la Presidencia, si ningún otro señor senador desea opinar, que se pase a la votación en general, y luego se consideren las observaciones en particular.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador por San Juan.

Sr. Gómez Centurión. — Señor presidente, señores senadores: como integrante de la bancada bloquista quiero adherirme a las palabras del senador preopinante, porque también nosotros, los bloques provinciales, hemos tenido activa

participación en las comisiones que han tratado este tema.

Coincido totalmente con la circunstancia de que este plan no es tan perfecto ni deseable como quisiéramos para dar la solución al grave problema que vive el país. Quiero dejar sentado que hemos sido conscientes de ello al trabajar con toda armonía. Fundamentalmente debo reconocer la enorme colaboración y preocupación manifestadas por los señores senadores Otero y Almendra, al informarnos de todas las inquietudes y permitirnos participar en conversaciones con representantes del Ministerio de Salud y Acción Social para tomar conocimiento cabal de este proyecto.

Por lo tanto, el bloquismo presta su conformidad en general, y en el tratamiento en particular oportunamente marcará una observación a un artículo.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador por Catamarca.

Sr. Saadi. — Señor presidente: en nombre del bloque justicialista quiero ratificar las expresiones del señor presidente de la Comisión, senador Almendra, en el apoyo a este proyecto en general y en particular. Debo a la vez ratificar el pensamiento expresado por el senador Sánchez sobre la pena que provoca la tremenda circunstancia en que nos toca tratar este proyecto de coyuntura.

Pero es necesario e indispensable hacerlo, porque las enfermedades endémicas y epidémicas están haciendo estragos en la población por falta de alimentación, ya sea en el caso de las madres durante la época de la gestación de sus hijos, o en el de las criaturas cuyas neuronas se ven afectadas. Por el hambre se produce una afección a las neuronas, una especie de degeneración muy difícil de salvar en las criaturas a medida que van creciendo.

Por esto, señor presidente, creemos que es muy importante aprobar este proyecto.

Aquí se han hecho también cargos muy serios sobre el origen de la desgracia que sufre el país. También se han señalado las potencialidades de la Nación y la situación en que se encuentra. Y no podemos seguir declamando sobre el destroz del país sin tomar las medidas adecuadas con los responsables. Creo que el gobierno de la democracia y de la libertad debe hacerlo y sin pérdida de tiempo; ése es el pensamiento del movimiento peronista.

No obstante lo avanzado de la hora y la cantidad de expresiones tan claras y correctas que efectuaron los señores senadores que me han

precedido en el uso de la palabra, me voy a permitir expresar el pensamiento político de peronismo. Hemos solicitado la creación de una comisión investigadora para analizar los ilícitos y la destrucción económica del país. Cumpliré su cometido tan pronto entre en funciones, no pudiendo dejar de expresar en este momento —como señalé— el pensamiento de mi movimiento.

Comenzaré señalando que ciudadano benemérito es aquella persona que en vida ha hecho méritos suficientes por sus servicios de bien público para su patria o la humanidad, mereciendo el testimonio expreso de su reconocimiento en el cumplimiento de su deber y ética por sus contemporáneos, quienes buscan perpetuar en lo futuro la imagen viva del ciudadano benemérito que sirva de modelo, ejemplo e instrumento de docencia cívica, principalmente para las jóvenes generaciones. La conducta e idoneidad señaladas se traducen concretamente en dar el nombre del servidor público a alguna calle, plaza, colocar algún busto, o hasta perpetuarlo en un monumento. Así se va formando una conciencia patriótica en el pueblo a través de quienes dejaron estelas positivas y refulgentes en las artes, ciencias, educación o política, que actuaron en aras del interés social por sobre el individual, sacrificando a veces sus propias necesidades. Ello evidentemente contagia y se arraiga en el sentimiento y espíritu que continúa en el devenir histórico e institucional del país.

Lo brevemente expresado nos introduce a nuestro tema con el fin de lograr fundamentar que, *contrario sensu*, el ciudadano que ejerció funciones públicas o las ejerce con atributos de soberbia y total menosprecio de los valores fundamentales de la sociedad a la cual causó graves y alevosos daños, queda perfectamente encuadrado en la responsabilidad emergente del artículo 45 de la Constitución Nacional a los efectos legales de ser sometido a juicio político. Porque ese instituto es de plena aplicación al mal desempeño de las funciones, y no como alguna interpretación subjetiva o de cierta doctrina interesada pretende hacer creer que únicamente corresponde su instrumentación a quienes se encuentran en el ejercicio actual de sus cargos.

Al respecto, en su *Manual de derecho constitucional*, el eminente tratadista doctor Carlos Sánchez Viamonte, en la página 254, nos enseña que: "Cabe, pues, acusación de cualquier irregularidad de cualquier naturaleza que sea, si afecta gravemente el desempeño de las funciones; es causa constitucional de acusación en juicio político. Basta el mal desempeño objeti-

vamente considerado para que sea viable la acusación, dados los términos del artículo 45 de la Constitución Nacional, instituido en defensa institucional de la Nación y de sus intereses internos y externos; queda librado al criterio del Parlamento que no actúa en él como poder legislativo, sino como poder público de contralor sobre el Ejecutivo, y sobre toda la administración pública que le está confiada". El ciudadano estigmatizado es, pues, aquel que atenta o atentó contra los intereses materiales y espirituales de la Nación y su marca de infamia debe ser anatematizada por las generaciones futuras, a fin de que no se reproduzca afrenta similar al cuerpo social.

En el mensaje al país pronunciado el 2 de abril de 1976 por el responsable de la conducción económica, se preveía que la ortodoxa aplicación de sus enunciados —versión calcada del liberalismo clásico de Adam Smith, de 1776, y a su vez, copiada e injertada *manu militari* en la sociedad argentina, con el proyecto monetarista de la escuela de Chicago, cuyo principal sostenedor es Milton Friedman— debería necesariamente producir efectos perniciosos sobre el aparato productivo de la Nación.

Asimismo, no puede constituirse en eximente de responsabilidad de su ejecutor el hecho de que el funcionario manifestara reiteradamente que estaban aplicando el plan económico aprobado por las fuerzas armadas, un sector de la Nación —observando en su decurso el fracaso del programa que conocía perfectamente bien desde su inicio—, porque dichas expresiones llevaban en sí el sello inequívoco de la aptitud de prever lo que ocurriría y, ergo, colocarse a salvo de la responsabilidad futura en el plano personal.

Por tal motivo, jurídicamente se puede iniciar juicio político y, políticamente, se lo debe llevar a cabo a los efectos de que las actuales autoridades de la Nación, surgidas por mandato del pueblo y reticentes, en el corto plazo que llevan en la función pública, a tomar medidas de carácter socioeconómico, se aproximen a una revisión de la catastrófica herencia. Pero es evidente que, para dicho objetivo, se deberá pedir el esfuerzo de sacrificio al pueblo para que comprenda la realidad que está viviendo y que el problema no se soluciona de la noche a la mañana, como demagógicamente se decía. Solamente así, el hombre argentino podrá ser partícipe en el esfuerzo compartido por todos los sectores de la vida nacional. En caso contrario, a nuestro juicio, estaremos en los prolegómenos de una nueva frustración de imprevisibles ca-

racterísticas, no deseadas por ningún buen argentino.

Mientras los responsables del mayor genocidio económico que recuerde la historia argentina gozan y disfrutan de total impunidad respecto de sus lamentables actos en el marco de un gobierno autoritario, al cual pertenecieron, en el actual estado de derecho se debe hacer justicia con la aplicación de la ley. Así, entonces, el gobierno popular asume la obligación de promover juicio político contra todos los responsables de la conducción económica del titulado "proceso" pero, a su vez, dicha decisión política lleva implícito el deber de las autoridades actuales del área a los efectos de no volver a subordinar la política económica de la Nación a los intereses de los centros internacionales de poder.

Así, estimamos fundamental la coordinación de una estrategia política global con los hermanos países latinoamericanos; que luchen por su segunda independencia en la defensa de las riquezas en materias primas y alimentos que atesora el continente, los cuales le pertenecen por derecho natural, como patrimonio propio e instrumento emancipador de los bloques hegemónicos mundiales, ya sea el Este o el Oeste.

Señor presidente: pido disculpas al honorable cuerpo por haber distraído unos minutos más su atención con estas expresiones. Pero creí que era oportuno hacerlas presente con vistas al tratamiento que se haga en su momento de las cuestiones económicas.

Quise señalar también que no debemos dedicarnos a lamentar la situación sino que debemos avanzar y dar un escarmiento, en el marco de la justicia y de la ley; a quienes tanto daño hicieron al país sembrando el hambre, la miseria y la desesperación entre la población argentina.

Esos señores que todavía hoy se pavonean por las calles de Buenos Aires deberían estar en otro lugar por todo el tiempo que señale la ley; deberían estar en la cárcel. Porque nosotros no necesitaríamos dictar esta ley de emergencia si no hubieran existido estos señores que posibilitaron el estado de desgracia en que se encuentra el pueblo argentino. (Aplausos.)

Sr. Presidente. — Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general.

—La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente. — En consideración en particular.

—Se leen y aprueban los artículos 1º y 2º.

—Se lee el artículo 3º.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador por Neuquén.

Sr. Solana. — Propongo el siguiente agregado a este artículo: "conjuntamente con los ministerios de Salud y Bienestar Social de cada provincia".

De modo que el artículo 3º quedaría redactado de la siguiente manera: "El conjunto de acciones dirigidas a tal fin será denominado en la emergencia Programa Alimentario Nacional y será conducido por el Ministerio de Salud y Acción Social, juntamente con los ministerios de Salud y Bienestar Social de cada provincia".

Interpreto que en esta forma se justificaría la presunción del señor miembro informante, en el sentido de que las provincias tendrán una efectiva participación. No basta que la tengan en la ejecución del plan sino que también deben tenerla en la formulación de los programas y proyectos.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador por Santa Cruz.

Sr. Almendra. — Señor presidente: el artículo 3º establece que el conjunto de acciones será denominado Programa Alimentario Nacional y que será conducido por el Ministerio de Salud y Acción Social, refiriéndose a la Nación.

Conducir no significa tener la suma del poder. Además, en los restantes artículos queda establecido que para la formulación del plan se tendrá en cuenta a las provincias, recabando de ellas toda la información necesaria. El artículo 4º, por ejemplo, se refiere a la ejecución y administración del plan.

Entendemos que el organismo idóneo para conducir el programa es el Ministerio de Salud y Acción Social. Durante mi exposición expresé que, si bien el plan es centralizado, su ejecución ha de ser descentralizada. Este tema ha sido bastante discutido.

En síntesis, consideramos que las provincias tendrán una real participación en el programa.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador por Buenos Aires.

Sr. Otero. — Las palabras pronunciadas por el señor senador Almendra hacen innecesaria mi intervención.

Sr. Presidente. — Si no se acepta la modificación propuesta, se va a votar el artículo 3º del despacho original.

—La votación resulta afirmativa.

—Se lee y aprueba el artículo 4º.

—Se lee el artículo 5º.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador por San Juan.

Sr. Gómez Centurión. — Es solamente para proponer el agregado de un párrafo que creo va a ampliar el espíritu que existe con respecto a la participación de las provincias, tema que nos preocupa bastante.

A pesar de que el artículo 2º dice en su última parte que se pide la remisión de toda la información actualizada que posean las provincias, propongo que en el artículo 5º, donde dice: "Las provincias coparticiparán en la ejecución del Programa Alimentario Nacional...", diga: "Las provincias coparticiparán en la planificación de prioridades y en la ejecución del Programa Alimentario Nacional...". Pienso que es importante que las provincias participen no sólo de la información sino también de la planificación y de las prioridades que cada una tenga para el mejor cumplimiento de este plan.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador por Santa Cruz.

Sr. Almendra. — Señor presidente: este tema ya ha sido motivo de nuestra preocupación, y quiero señalar al honorable cuerpo una primera situación con que nos hemos enfrentado al tratar este Programa Alimentario Nacional. Quiero recordar a todos los señores senadores que el proyecto remitido en revisión por la Cámara de Diputados ha sido aprobado allí por unanimidad no sólo en las comisiones sino también en el recinto, y que se le introdujeron algunas modificaciones al proyecto originario del Poder Ejecutivo. Por esa razón, a pesar de nuestras inquietudes y del afán de perfectibilidad del proyecto, se nos hacía un poco duro introducir nuevas modificaciones si queríamos dar efectiva realización a este programa alimentario.

De todas maneras, hemos tratado de dar participación a las provincias. Al respecto, quiero recordar al señor senador por San Juan que el proyecto aprobado por la Cámara de Diputados dice que las provincias podrían adherirse o que participarían. Nosotros decimos en el dictamen que las provincias coparticiparán en la ejecución del Programa Alimentario Nacional a través de sus autoridades naturales, que son los ministerios de Salud Pública y Acción Social de cada una de las provincias. A su vez decimos que un organismo de cada provincia asegurará la coordinación entre el gobierno nacional y el provincial a los efectos del cumplimiento del programa.

Si nosotros ponemos en el artículo 5º que las provincias coparticiparán en la ejecución del programa, no debemos olvidar que en otro artículo

se prevé la participación de las provincias, desde el momento en que se van a solicitar sus necesidades y se van a tener en cuenta sus relevamientos censales. Además, tenemos en cuenta la objeción que hacía el senador Solana cuando el artículo 2º expresa que "El Poder Ejecutivo nacional dispondrá los relevamientos censales donde no los hubiere..."

Todos sabemos que las provincias, incluso las más necesitadas o más azotadas por este flagelo del hambre y la desnutrición, tienen plena conciencia de sus necesidades.

Como bien señaló el señor senador Otero, no queríamos dar a esta ley un articulado tal que nos llevara a entrar en la reglamentación de la misma. Por esa razón decidimos dejar el artículo tal cual estaba redactado.

En consecuencia, si el señor senador Gómez Centurión ve cumplidas sus aspiraciones, solicito que dejemos el artículo tal cual está.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador por San Luis.

Sr. Britos. — Deseo comentar el mismo punto que se está considerando. En primer lugar, quiero pedir disculpas a la comisión por no haber participado previamente en el análisis de este tema. De todas maneras, quiero solicitar una modificación a la segunda parte del artículo 5º del proyecto, que dice: "Un organismo especial en cada provincia asegurará la coordinación...". para que el texto diga, si me lo permite la comisión, lo siguiente: "Un organismo especial designado por cada provincia asegurará...". De este modo defenderíamos mejor la autonomía y el federalismo porque, de lo contrario, este punto quedaría un tanto librado al azar o al manejo directo del poder central.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador por el Chaco.

Sr. Bittel. — Simplemente quiero apoyar la sugerencia formulada por el compañero senador Britos. El texto debería decir: "Un organismo especial designado por cada provincia..." para que existiera una participación real de las autoridades provinciales, porque, tal como está redactado ahora, no se determina claramente quién designa a ese organismo. Por eso apoyo la moción del compañero Britos, para que se introduzca la modificación que él propuso.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador por Santa Cruz.

Sr. Almendra. — Quiero aclarar a mis colegas senadores Britos y Bittel que sus posiciones estarían contempladas y les pediría que fueran

un poco más adelante en el articulado y repararan en el texto del artículo 7º, donde hemos puesto énfasis en esta misma cuestión.

El organismo al que se refiere la segunda parte del artículo 5º del proyecto de ley fue uno de los temas que hemos tratado con los asesores del Ministerio de Salud y Acción Social. Ya hemos dicho que no queremos que se creen organismos paralelos a los ministerios del área correspondiente de las distintas provincias. Ese organismo puede estar constituido por una sola persona, que va a ejercer solamente las funciones de coordinación. Por eso digo que la real participación de las provincias se encuentra contemplada en la primera parte del artículo 5º. Otra forma de participación se establece en el artículo 7º, que dice: "A los efectos de la coordinación para la aplicación de esta ley en los ámbitos nacional y provinciales, el Poder Ejecutivo nacional hará partícipe al Consejo Federal de Salud". Varios miembros que ya han participado de ese consejo —que ahora tenemos que reflotar— representan a las provincias, siendo los ministros del área pertinente de cada una de ellas los representantes natos ante dicho organismo.

Si esto satisface las aspiraciones de mis colegas, solicito que lo expresen para que podamos votar el artículo tal cual está redactado.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador por San Luis.

Sr. Britos. — Señor presidente: hice la salvedad de que no pude participar en las discusiones que se sostuvieron en la comisión sobre este punto, a pesar de que, con buen criterio, su presidente nos adelantó una copia del proyecto para que pudiéramos estudiarlo.

Pensamos que de mantenerse el artículo 5º, en su segunda parte, tal como está redactado ahora, podríamos dejar abierta la posibilidad de cierto intervencionismo en las provincias. Nosotros tenemos que tratar, en toda forma, de que los gobiernos federales puedan actuar libremente.

Este es un proyecto de ley que expresa la solidaridad del gobierno nacional ante el problema social que existe. Participamos plenamente del criterio que ha tenido el gobierno, pero queremos que las autoridades provinciales puedan desempeñarse libremente, de acuerdo con esta ley, porque, si no, estaríamos aceptando el tutelaje del Ministerio de Salud y Acción Social de la Nación.

Nosotros queremos que nuestras provincias puedan decidir en qué forma van a trabajar con esta ley.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador por Neuquén.

Sr. Solana. — Diré sólo dos palabras porque el señor senador Britos ha ratificado con precisión lo que constituye mi observación inicial sobre la necesidad de que se asegure el derecho de las provincias a coparticipar en la planificación, y no solamente en la ejecución del plan nacional de alimentación. Propongo concretamente que el artículo 5º se redacte de la siguiente manera: "Las provincias coparticiparán de la ejecución del Programa Alimentario Nacional a través de sus autoridades. La comisión especial propuesta por cada provincia asegurará la coordinación entre el gobierno nacional y el gobierno provincial a los efectos del cumplimiento del Programa Alimentario Nacional". Creo que esto recoge exactamente el sentido de la propuesta del señor senador.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador por Buenos Aires.

Sr. Gass. — He prestado atención a las advertencias formuladas por los señores senadores Solana y Britos, pero si creamos más organismos especiales y no nos ajustamos al artículo 7º terminaremos por fundar nuevas burocracias. La coparticipación de las provincias está salvada. El artículo 7º establece que "El Poder Ejecutivo nacional hará participe al Consejo Federal de la Salud".

Deben tener absoluta tranquilidad los señores senadores —y es obvio que yo también soy hombre de provincia— porque normalmente el Consejo Federal de Salud, como bien dijo el senador Almendra, está constituido por el ministro de Salud Pública, que nombra a sus asesores, de modo que Neuquén, San Luis y mi provincia, Buenos Aires, también estarán representadas en ese consejo.

Sr. Presidente. — La Presidencia estima que corresponde votar el artículo 5º en su redacción original.

—La votación resulta afirmativa.

—Se leen y aprueban los artículos 6º, 7º y 8º.

—Se lee el artículo 9º.

Sr. Trilla. — Pido la palabra.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador por la Capital.

Sr. Trilla. — Se trata de una observación sobre un posible error de imprenta. El artículo comienza con las palabras: "La donaciones en dinero o especies...". Entiendo que debe decir "especie"

Sr. Presidente. — Si no se formula observación, se va a votar el artículo 9º de acuerdo con lo propuesto por el señor senador por la Capital.

—La votación resulta afirmativa.

—Se lee el artículo 10.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador por la Capital.

Sr. Trilla. — El artículo 10 está redactado así: "Se arbitrarán las auditorías correspondientes para evaluar el costo del programa y conocer las empresas que fueren beneficiarias del mismo". Entiendo que no está claramente expresado lo que se quiere decir con "las empresas que fueren beneficiarias del mismo". En primer lugar, no todos los donantes son empresas; pueden ser también particulares. Sería preferible la siguiente redacción: "evaluar el costo del programa y conocer la nómina de donantes sujetos al tratamiento impositivo previsto en las presentes normas". De esta manera, todo estará involucrado en un solo concepto y, además, quedarán satisfechas las inquietudes de aquellos que deseen conocer quiénes participan como donantes en este programa.

Sr. Almendra. — La comisión a la que pertenezco, en principio, estaría de acuerdo con esa modificación. Pero, de la misma manera en que se hace alusión a las empresas, podría hacerse referencia a las personas o a los beneficiarios del plan.

Sr. Trilla. — Lo que sucede es que los verdaderos beneficiarios del programa son los carenciados. Esta es la realidad.

De este artículo debe surgir quiénes son los donantes para recibir, en consecuencia, un tratamiento impositivo especial, ya que ellos no son beneficiarios del plan. Esto es así porque cuando alguien, por ejemplo, dona 100 pesos, concurre con 90 y el Estado, a través de la desgravación, lo hace con los 10 restantes. Es decir que no resulta beneficiario sino simplemente uno de los donantes, sea una empresa o no.

Conociendo la nómina de los donantes abarcaremos todo el espectro de quienes concurren a proveer los fondos del plan, tanto en dinero como en especie.

Sr. Martiarena. — Entiendo que la intención del artículo podría quedar aclarada si dijera que se arbitrarán las auditorías correspondientes para evaluar el costo del programa y conocer quiénes han tenido vinculación con él. Precisamente, se trata de eso, es decir, de establecer quiénes están vinculados con el programa, sean proveedo-

res, donantes o beneficiarios. En consecuencia, utilizando una expresión de tipo general quedaría subsanada la cuestión que se ha planteado.

Sr. Trilla. — Insisto en que, según mi opinión, el tema se complicaría aún más porque también participan del programa quienes oportunamente vendan a la Junta Nacional de Granos los elementos necesarios para favorecer el sistema. O sea que también son participantes quienes concurren con sus ventas, a través de una licitación o no, según lo establece el plan.

Los beneficiarios del sistema son todos aquellos carenciados que, de una forma u otra, reciben las ventajas de esta ley. Entiendo que no puede haber una nómina de beneficiarios por que, entonces, debería contener los 200 mil, 400 mil o el número que la comisión ha estimado como beneficiarios.

Reitero mi opinión: si deseamos conocer la nómina de donantes sujetos al tratamiento impositivo previsto en la presente norma, debo hacerse referencia —no sé si ésta es la intención de sus gestores— a los ciudadanos o empresas con personería jurídica que, de una forma u otra, procedan a donar valores al fondo del programa, ya sea en dinero o en especie.

Sr. Martiarena. — ¿Me permite una interrupción, señor senador?

Con la redacción propuesta quedaría excluida la determinación del costo del programa.

Sr. Trilla. — De ninguna manera es así, señor presidente. La redacción es la siguiente: "Se arbitrarán las auditorías correspondientes para evaluar el costo del programa". Ese es un segmento del artículo. Y luego habla de conocer por añadidura quiénes son los donantes, porque dice: "la nómina de donantes sujetos al tratamiento impositivo previsto en las presentes normas". Efectivamente: estas normas prevén un tratamiento impositivo especial para los donantes, ya sean personas físicas o jurídicas.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador por La Rioja.

Sr. Menem. — Para aunar criterios podría simplificarse la redacción diciendo que "se arbitrarán las auditorías correspondientes para evaluar el costo del programa y conocer la nómina de donantes que intervinieren en el mismo". Con esto estaría satisfecha la pretensión del señor senador Trilla y también la del señor senador Martiarena.

Sr. Trilla. — De acuerdo.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador por Tucumán.

Sr. Araujo. — Señor presidente: creo que son atinadas las palabras del señor senador, pero considero que para involucrar a los donantes, que son beneficiarios de las deducciones, de las ventajas impositivas, habría que decir "las personas físicas o jurídicas". En efecto, son las personas las que se van a beneficiar, pero pueden ser físicas o jurídicas. Me parece que con eso se aclararía.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador por Misiones.

Sr. Velázquez. — Con el debido respeto que merecen los señores senadores preopinantes, entiendo que hay un error de interpretación: el proyecto no se refiere a los destinatarios, sino a los proveedores y al costo del programa.

Sr. Presidente. — Si no se formulan otras observaciones, la Presidencia entiende que podría votarse el artículo 10 con la redacción sugerida por el señor senador Trilla y el agregado del señor senador Menem.

Sr. Menem. — El agregado que propongo es el siguiente: "conocer la nómina de donantes que intervinieren en el mismo". Con eso quedan comprendidas todas las formas de donantes, y ya se sabe por las normas anteriores que se trata de los beneficiarios de las desgravaciones impositivas. La palabra donante implicaría tanto a las personas físicas como a las personas jurídicas.

Sr. Trilla. — Así es.

Sr. Presidente. — Se va a votar el artículo 10, con las modificaciones propuestas.

—La votación resulta afirmativa.

—Se leen y aprueban los artículos 11, 12, 13, 14, 15 y 16.

—El artículo 17 es de forma.

Sr. Presidente. — Queda sancionado el proyecto de ley.¹ Se comunicará a la Honorable Cámara de Diputados.

5

PEDIDO DE PRONTO DESPACHO

Sr. Presidente. — Ha quedado reservado en Secretaría el proyecto de ley de los señores senadores Gómez Centurión y Gil sobre transferencia de un terreno para la construcción de un colegio.

¹ Ver el Apéndice.